

Triunfo desnudo: el PRI en el vacío de sus ruinas

Manuel Villa Aguilera*

El Partido Revolucionario Institucional triunfó gracias al milagro de la oportunidad y a su eficaz maquinaria electoral, reforzada y actualizada a lo largo de los doce años de oposición. Quizás, un factor más le favoreció: conserva una cultura de disciplina interna y la brújula orientadora esencial que es la búsqueda del poder. Los escollos que debió superar no fueron pocos, algunos fueron realmente escabrosos, como la lamentable presidencia de Humberto Moreira, la influencia de priístas repudiados en todos los ámbitos, la opacidad acerca de las fuerzas e intereses aliados en torno a Peña Nieto y, en general, los abundantes negativos del priísmo. A pesar de todo, mantuvo —disminuidas, por cierto— la unidad, disciplina y consistencia necesarias de 1997 hasta la elección de 2006, atributos válidos, sin duda, pero que sólo llevan al éxito si los favorecen las circunstancias que abre en su beneficio la precariedad de los opositores.

El triunfo del PRI en las pasadas elecciones provocó escasas certezas y, en cambio, no pocas incertidumbres. No obstante que éste era el resultado esperado —dada la coincidencia sostenida en las predicciones de las encuestas de opinión—, no dejó de ser inquietante para el país encontrarse con la decisión electoral que optó por el retorno del PRI al poder, al elegir a Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.

* Doctor en Ciencia Política por el Birbeck College de la Universidad de Londres. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos de esa institución.

Produjo desconcierto entre ciudadanos y analistas la recuperación de un partido dominante, hegemónico en este caso, inusitada en las transiciones y sin antecedente similar. Desconcertante también fue que, sin evidencias siquiera mínimas de renovación interna, depuración o cambio para procesar una transformación decorosa, ganara la elección. En tales circunstancias, el triunfo del PRI, en un primer acercamiento, sólo se entiende en razón de condiciones propicias, gestadas en procesos ajenos a su mala calidad como organización que no se despoja de los viejos fardos.

Sobresalen tres componentes del entorno político que favorecieron al tri-

color: uno, a su candidato, Enrique Peña Nieto, se le percibió promovido más por una coalición ubicua de intereses y fuerzas, que por el partido, al que no se le dejó más papel que el de plataforma electoral; dos, el pésimo desempeño en la alternancia del panismo y, sobre todo, del gobierno de Felipe Calderón, quien además propició el debilitamiento del PAN, a lo que se sumó la muy insuficiente candidata Josefina Vázquez; y, tres, las inconsistencias internas del PRD (de cohesión e institucionalización), sus abrumadores negativos y la insistencia en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que sólo pudo despuntar gracias a factores coyunturales, como el clima anti-PRI que generó el PAN.

El PRI triunfó gracias al milagro de la oportunidad y, sin ninguna duda, a su eficaz maquinaria electoral, reforzada y actualizada a lo largo de los doce años de oposición (sobre todo, de los seis últimos). Quizás, un factor más le favoreció: el PRI conserva una cultura de disciplina interna y la brújula orientadora esencial que es la búsqueda del poder. Los escollos que debieron superar no fueron pocos y algunos fueron realmente escabrosos, como la lamentable presidencia de Humberto Moreira, la influencia de priístas repudiados en todos los ámbitos, la opacidad acerca de las fuerzas e intereses aliados en torno a Peña Nieto y, en general, los abundantes negativos del priísmo. A pesar de todo, mantuvieron la unidad, disciplina y consistencia necesarias —disminuidas, por cierto— de 1997 hasta la elección de 2006, atributos válidos, sin duda, pero que sólo llevan al éxito si los favorecen las circunstancias que abre en su beneficio la precariedad de los opositores.

Las interrogantes que trajo consigo el triunfo priísta son, al menos, de dos órdenes: del primero son las que tienen que ver con la participación electoral, la condición desnuda de partido competitivo anacrónico en todos los sentidos, así como con los factores sociales y de poder que sustentaron a su candidato, sugerentes de una nueva derecha por fin estabilizada. Este conjunto de interrogantes podría resumirse en una cuestión principal, aunque no exhaustiva, que de manera muy sencilla podría ponerse en estos términos: ¿Ganó el PRI o ganó su candidato, utilizando la maquinaria electoral del tricolor?

Del segundo orden son las interrogantes que remiten a preocupaciones de mayor fondo, y son también las que generan las más recias incertidumbres. ¿Podrá el PRI gobernar bajo las nuevas condiciones de convivencia plural y democrática de los doce últimos años? ¿Le impedirá su estructura de intereses y de organización generar gobernabilidad democrática? ¿Conseguirá Enrique Peña Nieto en la presidencia la suficiente libertad de operación para establecer alianzas y mantener al PRI sujeto a los términos compartidos con otros partidos, con los que deberá establecer acuerdos en el Congreso? Estas preguntas pueden también resumirse en una principal, en suma: ¿asumirá el PRI la pérdida definitiva de la condición hegemónica o, por el contrario, pondrá todo su esfuerzo en recuperarla para garantizar otra vez decenios de dominio?

No es fácil responder a estas preguntas, incluso, todavía habrá que esperar el inicio del nuevo gobierno para poder descifrarlas con suficiencia. Aquí, por lo pronto, se analiza lo relativo al cambio que significa que el PRI haya dejado su condición hegemónica y los términos de una nueva ubi-

cación, de acuerdo con su actual peso político y su perfil ideológico, dentro del actual sistema de partidos. Antes, sin embargo, será necesario precisar un componente del contexto de más amplio plazo, el relativo a las características de la democratización en México. Es decir, que la alternancia no alteró en lo esencial al régimen y el panismo gobernó bajo las condiciones sólo menguadas del presidencialismo priísta, para mencionar sólo lo más atrofianente. Hasta ahora este proceso se ha entendido a partir de una serie de verdades establecidas, las que, por eso mismo, han distorsionado considerablemente la comprensión de lo sucedido no sólo en esta elección, sino en los ya casi doce años de alternancia.

La democratización en México y el 2012

A partir de la derrota del PRI en el año 2000 por el candidato panista Vicente Fox, se asumió que el país entraba de lleno a la construcción del régimen democrático pleno, pues se cumplía un prerrequisito de valor absoluto, precisamente, la derrota del PRI. Una vez dejado de lado este remanente, la vía real al nuevo orden quedaba despejada. Aparejado a esto corría el supuesto de que el régimen priísta correspondía al orden político de las dictaduras, apenas en grados menos rígida; un autoritarismo menos opresor, pero siempre en la familia de lo dictatorial. Se asumió, igualmente, que la sociedad civil había jugado un papel descollante, tal como correspondía al derrumbe de las dictaduras socialistas, como en el caso de Polonia o Alemania del Este.

¿Es cierto que todo fue así y que ésta es la imagen incuestionable de lo ocurrido? Todo indica que las cosas ocurrieron de otra manera, la que, si bien puede inscribirse en la imagen generalizada de las transiciones, en realidad resultó de un conjunto de peculiaridades que conviene por lo menos registrar con precisión. Diversos autores, por ello, han propuesto que este proceso de cambio corresponde más precisamente al de la liberalización. Carlos Elizondo y Benito Nacif (2002), en su texto *La lógica del cambio político en México*, una de las discusiones mejor informadas y sistemáticas, así lo proponen y los trabajos de diversos autores que ellos reunieron sustentan una concepción en este sentido, bastante más propicia para descifrar los términos de la alternancia.

Lo que aquí se plantea es que el régimen priísta fue perdiendo, en efecto, dominio absoluto —hegemonía—, en un extendido proceso de realineamientos electorales iniciados tempranamente con la reforma de 1979, pero abiertamente detonados con gran energía en la elección de 1988. Tres fenómenos al menos contribuyeron a este proceso:

1. El cambio socioeconómico en México y el peso abrumador de la urbanización que produjo un nuevo perfil de agrupaciones empresariales y conglomerados de clase media; como contrapartida, un considerable adelgazamiento de los grupos incorporados al PRI en sus tres zonas corporativas, tradicionales bolsas de votos, muy disminuidas ya en los años ochenta del siglo XX.
2. Un cambio global que planteó presiones de todo orden a México, un país hasta entonces cerrado, muy armónicamente acoplado a las tendencias de la Guerra Fría, resumibles en un Estado fuerte y protector, una economía muy necesitada de éste, una vasta capa de población enmarcada en los términos de una política social hasta entonces eficiente y amplia, y un orden político de competitividad controlada, que permitía el cambio cíclico, sexenal, de la élite gobernante.
3. Una recomposición de las estructuras nacionales de poder, liberando las de carácter regional, sometidas hasta entonces al centralismo del modelo presidencialista, que, gracias al cambio socioeconómico, la apertura internacional y el impacto de políticas públicas del gobierno federal, ganaron autonomía de organización y de acción. Baste pensar que Carlos Salinas de Gortari tuvo que reconfigurar el modelo de designación de candidatos a los gobiernos de los estados; en vez de la decisión centralista dura y pura, tuvo que sembrar a sus hombres con anticipación, por ejemplo, como delegados de oficinas federales, para que fueran insertándose en el medio, armando alianzas y ganando la legitimidad territorial y local necesaria.

Éstas y otras muchas tendencias se desplegaron; aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en absoluta simultaneidad, fueron dando el impulso que propició una redistribución de fuerzas electorales. No es aquí el lugar donde esto se puede tratar con amplitud; otros autores ya lo han hecho, por ejemplo Marcela Bravo Ahuja (2009a); sólo hay que señalar que no hay duda de que expresan lo fundamental de los determinantes del cambio, si no de régimen —que a la fecha no acaba de ocurrir—, sí del sistema de partidos y de los términos de formación de gobierno.

Desde el punto de vista electoral, lo que aquí importa subrayar es que estas tendencias resultaron muy propicias a muchas fuerzas sociales, especialmente locales y de condición privilegiada en los estados de la República, más radicalmente en los del centro y el Norte. Como consecuencia, estimularon realineamientos partidarios que fortalecieron con gran celeridad a las oposiciones históricas,

en la izquierda y en la derecha, aunque de distinta manera por el carácter muy diferente de una y otra.

El PAN fue usufructuario directo de los impactos del cambio socioeconómico, como era natural, por su antigua trayectoria de partido opositor, núcleo de las clases privilegiadas, apegado a la legalidad y la lucha electoral, así como por su extensión, si no nacional, sí en amplias zonas de la República, no sólo como opción ideológica-programática, sino también como maquinaria electoral.

No había, para cuando tomó celeridad el proceso a mediados de los años ochenta, un equivalente al PAN en el lado izquierdo del espectro. Sin embargo, es claro que el impulso al cambio fue tan vigoroso que rápidamente generó incentivos a la consolidación de una izquierda beneficiada, además, por la fractura en el PRI. La elección de 1988 probó la solidez de los cambios, de la nueva carga social de los opositores al PRI y la intensidad de los reclamos sociales que se reflejaron en la muy rápida y consistente consolidación de la coalición de izquierdas cuyo resultado electoral fue memorable.

¿Cómo afectaron electoralmente estos cambios al PRI? ¿Cómo impactaron al régimen político? Estas cuestiones no han sido desentrañadas con la necesaria claridad y de ello depende explicar en su complejidad la recuperación del tricolor. Cabe advertir que su pleno esclarecimiento también contribuirá a descifrar hasta dónde todavía el PRI tendría la opción del retorno a la condición hegemónica o si ésta ya fue anulada por las transformaciones en el país, tal como aquí se supone.

De la alternancia al 2012

Durante los doce años de alternancia se propició un doble proceso en el que radica buena parte de la explicación del resultado electoral de 2012: las oposiciones mantuvieron su consistencia, pero apenas si acrecentaron, como organizaciones, su capacidad de representación política, su diseño de propuestas y el planteamiento cabal de renovación nacional. Es cierto que fue el PAN el que más se desgastó y el PRD el que mejor se conservó. Se generó así una suerte de empate de poder que resultó de la recuperación de fuerza electoral y consistencia territorial del PRI, a la vez que de estancamiento de las oposiciones; tendencias que con toda precisión ha documentado Rosa María Mirón (2009: 435-458).

Se llegó así a esta elección bajo una peculiaridad no rara en el mundo contemporáneo, aunque sí extrema en el caso de México: la competencia dependería de manera

fundamental de los candidatos y de su capacidad de atraer votantes. Los partidos correspondientes sólo servirían de maquinarias electorales, que poco agregarían en definición y calidad al peso de los candidatos. De hecho, en los tres candidatos pesaron más los negativos de las organizaciones, en su daño, que los positivos, muy reducidos a su mínimo en los tres casos, incluso en el muy menor del Panal.

Dada esta circunstancia, está claro que varios errores de operación del panismo como partido, del Presidente de la República como pretendido gran elector y, desde luego, de la candidata disminuyeron la base electoral del PAN y, además, tuvieron un impacto inesperado: favorecer a López Obrador, al intentar golpear duramente al PRI, a fin de colapsar la candidatura de Peña Nieto. Éste, como consecuencia, quedó acotado en una situación de pérdida de votos, la que pudo neutralizar al costo de cerrar la posibilidad de incrementar votantes, que prácticamente se agotó —como sorpresivamente, por las predicciones de las encuestadoras, mostrarían las urnas. Es decir, el efecto combinado Josefina Vázquez-López Obrador logró neutralizar a Peña Nieto. La coyuntura resultó muy propicia para López Obrador, quien la supo aprovechar.

La campaña de Peña Nieto y el priísmo presentó un doble y claro perfil: el sostenido avance del candidato —aunque con una moderada tendencia al declive en la fase final— y la práctica ausencia del partido, que contó más como centro de críticas, denuestos y denuncias de sus oponentes y de no pocos espacios periodísticos, sin dejar de ser maquinaria electoral.

En realidad, Peña Nieto continuó la tendencia inaugurada por Salinas de Gortari, derivada del enfoque tecnocrático de la política: el desprecio a los partidos, que supone que son las élites ilustradas, los personajes con pedigrí internacional, los que deben dirigir a los países; la política partidaria es menor; además de estar plagada de compromisos que, al final, deterioran la función pública, deforman la acción gubernamental y obstruyen las políticas públicas. Este enfoque, que trajo aparejado el neoliberalismo, se reforzó por el malestar existente contra el PRI desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, exacerbado por los efectos de la elección de 1988.

Se inició entonces una doble trayectoria: en una vertiente, mantener al PRI como maquinaria electoral, una vez que contaba con arraigo y cuadros a lo largo de la nación y que resultaba casi imprescindible para cualquier elección. De hecho, así fue para Carlos Salinas al aproximarse la elección de medio sexenio, a fin de conseguir una mayoría cómoda en la Cámara de Diputados. En otra dirección, mantener

al partido en el más bajo perfil —quizás sustituirlo paulatinamente, con el recurso del Movimiento de Solidaridad, de tristes y poco saludables consecuencias. Con todo, Luis Donaldo Colosio consiguió no sólo la recuperación electoral del PRI, sino una relativa mejora de imagen; al menos que se aceptara que ahí había conflicto y lucha de tendencias y fuerzas y no sólo un monolito *dinosáurico*.

Sin embargo, esta tendencia se vino abajo con el asesinato de Colosio y se impuso la repulsa inocultable de Ernesto Zedillo, de manera radical al partido, pero también a la política —de inspiración más tecnocrática que políticamente edificante. En este sentido, un gobierno poco tenía que hacer mediante ella, pues no daba para mucho. La tarea era económica; lo ratificaba la situación de crisis que se produjo en 1994-1995.

Agravó eso todavía más el hecho de que los partidos de oposición se sumaran a la misma orientación, aunque con modalidades propias. El PAN, de manera franca y radical, como un partido en el que la acción política se transformó en una agencia de ventas, con el ascenso de Fox como candidato; el programa era la mercadotecnia y el objetivo convencer al consumidor de las bondades del producto. El joven PRD estaba entrampado; lo dañaba la imagen antigua, cansina, de un Cuauhtémoc Cárdenas que no conseguía presentar alternativa a la mercadotecnia de Fox, ni a la tecnocracia antipolítica de Zedillo, por una parte, y que tampoco conseguía, en el otro frente, conciliar izquierdismo y vocación estatal con apertura al mercado, como base de renovación del partido. El PRD era ya, de manera incontenible, una coalición de fuerzas relativamente amorfas, que poco a poco tomaban la configuración de lo que después se designó como *tribus*.

Fue así que en el sexenio de Zedillo se reforzó la tendencia detonada en el de Salinas: el partido servía para hacer elecciones; éstas serían, en los estados, tarea del gobernador. Si ganaba el PRI, bueno, y si no, también; por su parte, al gobierno federal le daba igual. Lo segundo era correcto y saludable, no así lo primero, porque así se propició la dispersión de fuerzas, la configuración de poderes fácticos y el poder de los gobernadores. Y algo más pernicioso: Zedillo, queriendo marginar al PRI, dejó correr una sólida tendencia que trajo consigo su revitalización, a partir de los conglomerados tradicionales. Al acorralar a los priístas, los puso a la defensiva y generó la autoprotección de los amagados, la solidaridad que echa mano de los recursos tradicionales y los instintos atávicos para asegurarse la sobrevivencia. Los priístas leyeron bien y a tiempo el mensaje; en ese sentido, su intuición pragmática es inmejorable. Y, desde luego, en

ese instinto vulgar, Roberto Madrazo, paradigma de la animalidad política priísta, lo entendió oportunamente, lo que hizo posible su liderazgo por genética pura.

Transición desde la hegemonía

El PRI salió del poder en el 2000 y no se vino abajo. Su derrota fue contundente, no abrumadora ni desastrosa; su candidato, Francisco Labastida, obtuvo para él en la adversidad (una gran suma ciudadana antipriísta) el 36.10% de los sufragios (13,576,189 votos), es decir, conservó a su favor un tercio del electorado. Mientras, su partido obtuvo 36.7% de los votos para senadores y 36.9% para diputados (ligera, pero significativamente, más votos que el candidato presidencial), lo que se tradujo en 211 diputados y 60 senadores. Más abrumadora fue la derrota en la elección de 2006, con quizás el peor candidato de toda su historia, Roberto Madrazo. El partido parecía haber sido víctima de sí mismo. Madrazo era el arquetipo de lo más rechazado del priísmo, operador vil, sin consistencia ideológica, ni calidad personal; pragmático burdo y conocido por sus habilidades en la operación fraudulenta.

Todo indica que de la derrota sufrida en 2006 el PRI sacó lecciones en términos de organización y eficacia para la contienda electoral; leyó bien sus debilidades y las de sus contendientes y no desaprovechó las experiencias. Durante el gobierno de Fox y la presidencia de Roberto Madrazo, fue el partido más exitoso en las elecciones locales, así como, y quizás más relevante, en las intermedias de 2009.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en términos de estructura interna, definición y actualización ideológico-política, y diseño programático para la nación; de ahí su nebulosidad con respecto a la comprensión del país y la ausencia de propuestas sólidas para la recuperación estatal en conjunción con el mercado, a la vez que con la equidad social. De hecho, la gestión de Beatriz Paredes al frente del PRI, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, resultó, precisamente, la expresión más contundente de la decadencia del priísmo como organización moderna, práctica política, renovación interna y definición ideológica.

Es así que mientras los aspectos orgánicos, de vida interna, se han mantenido prácticamente en el inmovilismo y hasta la parálisis, en lo que toca a la maquinaria electoral el desempeño del partido ha sido otro (Rosales Álvarez, 2010).

El proceso de democratización en México, como está más que claro, quedó trunco, consiguiendo, eso sí, un objetivo muy relevante: la transformación del sistema de partido

hegemónico en uno efectivamente plural y competitivo. Este nuevo sistema no acaba de asentarse, principalmente, por un círculo vicioso: sus deficiencias obstaculizan la democratización y, detenida ésta, los partidos, al beneficiarse de esas deficiencias, permanecen partidocráticos; es decir, evitan la democratización interna al estar sujetos a dominios oligárquicos en su organización, esto es, sometidos a partidocracias. De este modo, resulta redituable para ellos obstaculizar la reforma integral del sistema, evitando reformarse a sí mismos. Por lo que corresponde al PRI, como señala Rosa María Mirón:

al más puro estilo de la vieja tradición que lo caracteriza, el PRI ha sido capaz de asegurar, en el largo plazo, un comportamiento electoral bastante estable que, sin importar los síntomas de abstención creciente o volatilidad electoral, lo sitúan muy lejos todavía de un escenario de realineamientos en la preferencia de quienes hoy constituyen su amplio cuerpo de votantes (2009: 448).

Por lo pronto, todo indica que esta elección de 2012 abrió la posibilidad de un fenómeno relativamente novedoso, que puede consolidarse como permanente: el de un partido dominante en un sistema competitivo. No son sólo los resultados de esta elección de 2012 los que lo sugieren con cierta contundencia, al menos hasta ahora, sino algo más, los resultados de las elecciones de 1997 y 2000. En la primera, el PRI pierde la mayoría en el Congreso, pero se conserva como primera minoría; en 2000, al tiempo de la elección, gobierna en 21 estados; es derrotado, pero permanece como segunda fuerza con un caudal considerable de votos y se conserva como primera minoría en el Congreso. El sexenio de Fox fue de recuperación priísta; el partido triunfó en elecciones locales y, a mitad de periodo, en los comicios que renovaron la Cámara de Diputados. Fue hasta la elección de 2006 cuando pasó por su peor momento en la elección nacional; queda claro que esta gran derrota, que lo dejó como tercera fuerza, se explica por la falta de un planteamiento nacional durante la pésima conducción de Roberto Madrazo, cuando sólo funciona como artefacto electoral, siempre con apoyo de los gobernadores, pero sin oferta seria para la nación.

Desde la toma de posesión de Felipe Calderón hasta la postulación de candidatos, seguirá jugando un papel central; conserva 19 gubernaturas y un peso mayoritario en el Congreso. Desde el punto de vista de su enraizamiento electoral, no hay duda de que progresa como un partido sólido, fuerte, suficientemente asentado y estructurado

territorialmente. Los gobernadores configuran una cúpula bien organizada que se conduce bajo principios de racionalidad política indudables: conservar y acrecentar el poder de la organización, evitando disputas y conflictos; cada uno cuida su territorio y entre todos cuidan el territorio común al que aspiran a gobernar, que es la nación.

Como quedó bien claro durante las campañas, el PRI no superó los muchos y fuertes negativos y ni siquiera los pudo disimular. Sin embargo, tuvo algo en su favor que parece haber contado notablemente: en la situación de inseguridad social y política y de incertidumbre e ineficacia económica, resultar una alternativa por la que valdría la pena apostar. Con esto se colocó en el centro del espectro. Es cierto —hay que decirlo de una vez—, un centro bastante incoloro e insípido. Sólo que la oferta de sus contendientes, de fuerte color y sabor, resultó monotónica, pobre en planteamientos, subrayando en exceso la denuncia del PRI como un peligro que busca retornar a los viejos tiempos. De ahí que la alternativa, Josefina Vázquez o López Obrador, ofreció una oposición decidida al tricolor pero, en lo demás, incertidumbre; cada uno por razones distintas. Esto, más las peculiaridades del sistema electoral y de partidos, sólo les dejó una posibilidad: que predominara el voto estratégico sumando fuerzas de los polos en favor de algún opositor, para detener al PRI.

Base electoral dura vs. electorado dinámico

La trayectoria electoral del tricolor a partir de la derrota de 2000 muestra altas y bajas, pero sin duda dentro de límites que sugieren que conservó una parte sustancial de su base electoral, excepto en la situación muy singular de la elección presidencial de 2006 (Bravo Ahuja, 2009b; Mirón Lince, 2009). De ahí que pueda postularse la hipótesis de que el partido no sólo fortaleció su voluntad de volver al poder, sino que también ha buscado establecerse como dominante; sería una quimera pretender recuperar la condición hegemónica.

El comportamiento electoral del PRI en las sucesivas elecciones, desde 2000, permite sostener que sus cúpulas dirigentes se propusieron combatir en la contienda bajo una condición promisorio: contar con una base electoral muy consistente y amplia, susceptible de crecer, postergando cualquier otro objetivo partidario. La derrota de 2000 sacó al partido de Los Pinos, pero no de la lucha por el poder; los resultados fueron bastante decorosos, si así se puede decir, para una organización que venía gobernando al país desde

1946 —en su fase contemporánea— y que llegaba al fin del siglo con una amplísima desaprobación del electorado.

El candidato Francisco Labastida consiguió, en el contexto de una gran repulsa, el 36.10% de los votos, mientras el PRI obtuvo 211 posiciones en la Cámara de Diputados y 60 en la de Senadores. En contraste, Vicente Fox obtuvo 42.52% de los votos (15,988,544), en tanto Acción Nacional quedó por debajo de éste en un millón 784 mil 956 votos en la votación para senadores y en un millón 776 mil en la de diputados.

Esto hace pensar en un cambio considerable en el electorado: su apertura a diversas opciones. En una proporción considerable, no se aferró a un voto ideológico, que lleva a sufragar en todos los casos por su partido. En contraste, poco cambió en la base electoral de los dos grandes opositores al PRI (PAN y PRD). En efecto, esto sugiere que, desde tiempo atrás, el electorado no quiere una presidencia con partido hegemónico; evalúa, en primer lugar, los atributos personales de los candidatos presidenciales y redondea luego, por así decir, su decisión, escogiendo opciones distintas en el caso del voto congresional.

El patrón, por cierto, se repitió en 2006. El electorado privilegió la valoración de los candidatos. En este caso, esa apreciación aparece en sentido contrario al 2000; ahora castiga al menos aceptable de los candidatos y el voto a favor del priísta Roberto Madrazo cae en plomada, a 9,301,441 votos (22.23%); Felipe Calderón obtiene 15,000,284 votos (35.89%) y Andrés Manuel López Obrador, 14,756,350 votos (35.33%) (porcentajes finales ajustados por el TEPJF una vez desahogadas las impugnaciones que procedieron).

Calderón quedó por debajo de Fox en alrededor de un millón de votos (Fox, 42.52% vs. 35.89% de Calderón); en tanto, el voto priísta se movió hacia el PRD y tal vez algo hacia el PAN. A su vez, Calderón (con 35.89% de la votación) quedó por arriba de su partido, el PAN, que obtuvo el 33.39% de los votos. En el PRD, López Obrador obtuvo el 35.33%; el partido, 29.00%. De modo que Felipe Calderón obtuvo algo así como 1,155,162 más votos que el PAN; en tanto, López Obrador, 3,079,752 más que el PRD (voto por diputados en ambos casos).

En contraste, el PRI, en lo que corresponde a la elección para diputados, obtuvo mejor resultado que su candidato (28.18% vs. el 22.23%), con una diferencia de 2,375,157 votos. En cualquier caso, lo que por lo pronto se constata es el carácter dinámico del electorado.

Este hecho parece haber sido bien captado por la cúpula priísta que, en 2012, decidió jugar con un candidato de alto atractivo, al menos en la primera fase del proceso

(la selección de candidatos en el interior de los partidos); estrategia que, por cierto, va a mantener el tricolor y que, si bien funcionó, no rindió los óptimos resultados que esperaban, como se probó en los comicios.

De nueva cuenta, es de suponer, operó la perspicacia del electorado y distribuyó su voto de manera que generó resultados inesperados —que dejaron en situación embarazosa a la mayoría de las casas encuestadoras—, los que, asimismo, produjeron equilibrios sorprendentes. El PRI recuperó la presidencia, pero debidamente acotado en el Congreso; el PAN perdió por partida doble, castigando a su gobierno y limitado en el Congreso. Y, en tanto no se cuenta con mayor información, cabe pensar que el elector juzgó que el PRD resultaba mejor opositor, más apto para controlar al PRI que el PAN.

La Hipótesis Magaloni

El cambio en el régimen y específicamente en el sistema de partidos es claro: el PRI ha perdido la condición hegemónica, el sistema es altamente competitivo y el electorado es, sin duda, un ente racional, dinámico, que distribuye su voto para producir, justamente, equilibrios. Sin embargo, también permanece una tendencia, como ya se dijo, la del PRI recolocándose, en condición ahora de partido dominante. ¿Qué explica esta tendencia?

Beatriz Magaloni (2002: 229-280), al analizar las características de los electores en los comicios de 1996, encontró las que pueden ser las claves del nuevo arreglo en el sistema de partidos. Se puede asumir que la Hipótesis Magaloni resulta plausible debido a que las predicciones que se desprenden de su análisis guardan paralelismo con los resultados de las sucesivas elecciones presidenciales, con la relativa excepción de la de 2006, que no pocos analistas consideran atípica para el PRI, con la casi radical distribución del voto opositor en dos partidos.

Magaloni encuentra que en un sistema de mayoría relativa para la elección presidencial, como es el mexicano, la tendencia esperable es la que suele prevalecer en el bipartidismo y a la que se le conoce como *Ley Duverger*; ésta consiste en que el elector hará a un lado su primera preferencia partidaria y estará dispuesto a votar por el partido de su segunda preferencia si las probabilidades de triunfo de éste son mayores. A esto se le llama *voto estratégico*. La peculiaridad en México —encuentra la autora— es que se dan dos universos: de una parte, los que están dispuestos a votar estratégicamente por el partido que presente más probabilidades de derrotar al PRI; en este caso, se privilegia el

rechazo a este partido. Sin embargo, existe otro universo, el que se mantiene en la lealtad a su partido, el del voto ideológico, que deja en segundo plano el rechazo al PRI.

En tales condiciones, la suma de votos anti-PRI no alcanza los límites necesarios para derrotarlo y esto favorece su sobrevivencia. Magaloni predice que sólo con la suma de ambos universos vendría la esperada salida del PRI de la presidencia. Como se ve en los datos de 2000, comparados con los de 2006, todo indica que la hipótesis funcionó. Habría que agregar que lo que hizo posible la suma mayoritaria anti-PRI radicó más en el candidato que en el partido; Vicente Fox consiguió el efecto por tantos años esperado.

Por contraste, la elección de 2006 mostraría que los partidos seguían sin tener la capacidad de atraer votantes de otro partido bajo la demanda de derrotar al PRI, excepto que su candidato resulte en una invitación a no votar por él, como ocurrió con Roberto Madrazo. Sin embargo, la medianía de los opositores (Calderón y López Obrador) canceló el efecto Fox de 2000 y generó un empate que se resolvió, conflictivamente, por un mínimo dramático.

La hipótesis más general del planteamiento que aquí se propone sugiere que con este marco de referencia sistémico electoral se llegó a 2012. Los resultados, hasta donde se puede por ahora suponer¹, encuadrarían en la lógica, que se sigue aquí, de la Hipótesis Magaloni. El sentido en el que ahora se verificó mostraría que, a pesar del movimiento del voto entre los opositores al PRI —disminuye el del PAN y se favorece a López Obrador—, la suma anhelada no se consiguió. ¿Cómo explicarlo?

Lo que aquí se supone es que Peña Nieto consiguió neutralizar el efecto suma anti-PRI, sólo que apenas parcialmente; lo consigue en la votación para elegir presidente y en menor medida en la congresional, en la que el electorado suma votos anti-PRI optando por darle un peso mayor al PRD.

Esta lógica, que parece estar volviéndose inherente al sistema de partidos en México, como ya se indicó, tiende a favorecer al PRI como partido dominante y vuelve extraordinariamente exigentes los requerimientos en calidad de candidatos, para que sus opositores sumen votos; aspecto que, además —no sería aventurado suponer— resulta de las lecciones y decepciones que dejó Fox, quien, para el elector, no supo corresponder al voto estratégico que recibió.

Queda otra cuestión: ¿qué sucedió con los votantes que se mantuvieron en la opción ideológica? Hasta donde

¹ Nota de la edición: El artículo fue recibido en *El Cotidiano* el 30 de julio de 2012.

se alcanza a percibir, la porción que presumiblemente optó por el voto estratégico quedó delimitada por la que se mantuvo en el voto ideológico. De otra manera, no se entiende el porqué de los 19 millones de votos que consiguió Peña Nieto; lo que favoreció el alegato suspicaz basado en sospechas sobre fraude y compra de votos, hasta ahora no suficientemente sustanciado, al menos para explicar la diferencia entre triunfador y segundo lugar. Pero de esto se desprende otro enigma: el contenido del voto ideológico, ¿se puede suponer algo tan simple como izquierda vs. derecha? Hay razones para pensar en algo más complejo.

¿Hacia un PRI de derecha?

La hipótesis que por lo pronto aquí se propone es la siguiente: hubo un segundo universo de voto estratégico, pero optando en un marco de recomposición de alternativas ideológicas. ¿Cómo explicar este aparente contrasentido? Es decir, la lealtad ideológica se planteó en torno a la voluntad de llevar a cabo reformas, y éstas se presentaban en sentido encontrado: el de la ideología del PRD y del PRI vs. las afines al PAN, y que éste no pudo conseguirlas. Sea por omisión, resistencia del PRI y Peña Nieto a dar una definición ideológica clara, sea porque en tal condición los opositores lo posicionaron, el hecho es que el PRI terminó obligado a asumir una posición asignada desde fuera. Tal posición fue la del partido del reformismo, pero en la modalidad del PAN: Peña Nieto sí conseguiría lo que el PAN no pudo.

Al radicalizar su posición, López Obrador delimitó sus alcances electorales, agregando, pero no de un modo suficiente para triunfar. El PAN, un partido poco decidido e indefinido como gobierno —resultó más un calderonismo coyuntural que una fuerza con programa histórico—, lo fue más todavía como propuesta en la campaña, terminando como un partido de clase media, incoloro, que se resume en la frase políticamente inocua de “Josefina diferente”.

En la dinámica de las campañas, el PRI resultó el partido con más probabilidades de realizar las reformas que el PAN no pudo echar a andar. Y, en tal contexto, se vio encerrado en la imagen del partido de la derecha, si no es que ya lo es estructuralmente. Esto es lo que se entiende en la caracterización tradicional de la derecha en México: el partido del dinero, del orden, de la distancia con la Revolución Mexicana.

Poco se puede afirmar al respecto con la información disponible; sólo es posible plantear las siguientes preguntas: ¿La base electoral del PRI, férreamente integrada a la eficiente maquinaria electoral, por una parte, y el voto ideológico

de la derecha más contemporánea a favor de Peña Nieto hicieron la suma ganadora? En tanto, ¿el voto duro del clientelismo perredista y la suma estratégica tradicional anti-PRI y antirreformas de derecha que consiguió López Obrador hicieron la gran suma opositora? Lo que sí parece definitivo es que el voto duro, nostálgico, de una derecha que se diluye y se resigna a su condición de clase media decente y diferente hace la triste suma residual del PAN.

Deja la elección un reto enorme al PRI. Por una parte, su eficacia electoral y probabilidad de partido dominante dependen de un electorado muy ágil para decidir en términos racionales dentro del contexto real de opciones y probabilidades y de lo que se juega en cada elección. Por otra, se queda, por lo pronto, posicionado a la derecha. ¿Podrá, desde ese lugar, ser partido dominante?

Consistente pérdida de legitimidad

EL PRI ya no es hegemónico, ni se ven las posibilidades de que vuelva a serlo nuevamente, porque ello depende del sistema de partidos y éste, a su vez, de la complejidad social y la del electorado. El tricolor tuvo hegemonía en un sistema social de relativamente baja diferenciación, frente a una ciudadanía muy precariamente configurada y que no generaba partidos relativamente fuertes. Todo esto, además, en un entorno, el de Guerra Fría, por una parte, y el del modelo estatista desarrollista de gobierno que favorecían al PRI.

Dicho de otra manera, la hegemonía es un producto combinado con buen nivel de armonía, de fuerza y consenso. El PRI tenía un nivel alto de consenso y de legitimidad en tanto era el partido del cambio y la Revolución y, como tal, el espacio de confluencia de los grandes actores de esa Revolución: trabajadores, campesinos, clases medias. Ya por sí sola esta confluencia le daba poder y legitimidad, y tenía, además, la fuerza del Estado.

En ese marco, la legitimidad del PRI dependía de la capacidad para cumplir con dos objetivos: el de la eficacia como conductor del Estado, lo que significó conseguir un grado razonable de progreso, desarrollo económico y equidad social; y el de ser factor de estabilidad. El partido garantizaba niveles convenientes de orden y tranquilidad en el país, en el doble sentido más angustiante para los ciudadanos y el capital: control de la delincuencia, de la inseguridad pública y, por otra parte, control del conflicto social y político.

A partir de 1968, como bien se sabe, los gobiernos priístas fueron perdiendo la capacidad de cumplir con estos objetivos y si lo hicieron fue mediante costos altísimos para el país y la población. La seguridad no estaba del

todo garantizada; si bien se estaba lejos de los niveles de inseguridad del presente, sin duda ya había indicios de ir por mal camino.

Como experiencia acumulada desde 1961 (con las manifestaciones de simpatía a la Revolución Cubana) hasta 1968-1972, la policía servía más para reprimir que para proteger. Y más grave, también el Ejecutivo perdía eficiencia desde el punto de vista de la gestión gubernamental, económica sobre todo; para ser eficiente tuvo que operar por medio de la emisión de dinero, el endeudamiento y el gasto público desbocado, con consecuencias gravísimas al final del ciclo.

Visto y padecido esto en el gobierno de Luis Echeverría, se volvió a padecer en el siguiente, de José López Portillo; mala gestión económica con consecuencias desastrosas, deterioro creciente de la capacidad de dar seguridad al ciudadano, la evidencia inocultable de la corrupción policial y el nicho abierto para la protección de delincuentes, al extremo del caso Durazo. Y el corolario, la estabilidad política ya no dependería más de un Ejecutivo fuerte y centralizador; en lo sucesivo, gracias a la reforma política, dependería de acuerdos entre una pluralidad de fuerzas que suponía la cooperación entre Legislativo y Ejecutivo, asunto que se menospreció y hasta ahora no se funcionaliza. Como, adicionalmente, la Guerra Fría se terminó y el estatismo desarrollista de origen keynesiano se desplomó, el contexto estructural del partido hegemónico prácticamente se había desvanecido.

Desde luego, hubo mucho más que sería largo enumerar; pero lo que no se puede soslayar en términos del cambio político y electoral, sobre todo, es la emergencia sólida de los poderes territoriales, de las fuerzas locales y regionales, así como de la autonomía consistente, aunque relativa, de las entidades federales, de la configuración de la política propia en cada entidad, aspecto que si bien creció aparejado a los cambios antes enunciados, guarda especial importancia por reflejar peculiaridades de la configuración estructural de la nación desde su gestación en el siglo XIX. No sólo esto expresa contradicciones severas que permanecieron ahí como fuerzas telúricas, en acumulación, después de concluida la acción armada de la Revolución Mexicana que, en mucho, las liberó, pero que no logró ni desahogarlas, ni menos aún armonizarlas en un acuerdo federalista satisfactorio (Villa, 2009: 417-434).

Al iniciarse el gobierno de Carlos Salinas el PRI estaba triplemente dañado: internamente, por la selección del candidato: Salinas de Gortari resultó desconfiable y, para muchos, repudiable. En lo externo, porque el resultado

electoral quedó en el más absoluto cuestionamiento; se confirmaba su carácter de maquinaria de fraude. Y desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque el nuevo gobierno de Salinas, calificado como de tecnócratas, repudiaba al partido, así fuera de soslayo; corrió incluso la idea de su sustitución por un nuevo organismo sano y renovado.

Sin embargo, Luis Donald Colosio consiguió recuperar grados considerables de confianza en el partido, sobre todo la legitimidad electoral, al diversificar cuadros y procedimientos que dieron lugar a triunfos electorales claros y reconocidos, y abrió vía a la reforma. La obra de Colosio no se completó en el partido y tras su candidatura, al ser asesinado, la tímida esperanza de la renovación del PRI se vino abajo. El sucesor de Colosio, Ernesto Zedillo, no perdió oportunidad de sugerir e insinuar su rechazo al PRI y así culminó su gobierno con el triunfo, por fin, de la oposición panista, la de mayor legitimidad para cumplir esta tarea.

Sobrevivir en las ruinas

Por lo que toca a organización interna, medios adicionales y transparentes de financiamiento, nada se puede advertir. Y por lo que corresponde a renovación ideológica y programática, todavía menos. En este sentido, se puede afirmar que el PRI ha logrado, de manera sorprendente, vivir en el limbo, sin definición, sin toma de posiciones claras, más bien evadiendo y haciendo propuestas que sólo buscan adecuarse a la agenda dominante en la nación. Francisco Reveles (2003: 33-50) planteó, a raíz de la crisis del partido con la derrota en la elección presidencial de 2000, los siguientes aspectos que debía atender para conseguir la entonces sí imprescindible refundación. Conviene hacer un breve balance:

1. Conformar una coalición dirigente sin el Presidente de la República. Sin liderazgo por encima de la organización que designe dirigentes y candidatos, ésta debe buscar la forma de llenar ese vacío. La coalición debe ser el medio estable para lograr el liderazgo legítimo y duradero.
2. La búsqueda de un nuevo equilibrio entre dirigentes, gobernantes y parlamentarios. El partido quedó sujeto a una dispersión de fuerzas sustentadas sobre todo en espacios regionales de poder. Esto determina que el PRI dependa de tres centros de poder que no encuentran fácilmente cohesión, la dirigencia con las organizaciones internas, los gobernadores y los parlamentarios.
3. Reorganización con base en las regiones y no en las corporaciones. Éstas no sólo han perdido vigor, sino

que para dar buen sustento al partido tendrían que democratizarse. Aun así, por sí solas no garantizan el sustento requerido, de ahí la importancia de extender la base a lo largo y ancho de la organización territorial.

4. Una nueva ideología como partido de oposición y frente a un contexto de predominio de la derecha. Al asumir la legalidad, el PRI optó, como única ruta para volver a la presidencia, la electoral, ganando las elecciones, lo que le obliga a una nueva oferta electoral. Como parte de ello, la actualización ideológica es imprescindible. Ésta, además, es fundamental para dar cobertura a sus fracciones parlamentarias, que resultan oportunistas o indefinidas frente a la clara definición de panistas y perredistas. Por otro lado, el tricolor, desde la presidencia de Miguel de la Madrid, se ha venido deslizando hacia las posiciones de derecha de manera más inercial que responsablemente asumida.
5. Nuevos mecanismos de financiamiento, múltiples, permanentes y transparentes para el desarrollo de las actividades del partido. Aunque el financiamiento público es considerable, resulta insuficiente, sobre todo si la votación del partido no es muy alta. La falta de transparencia de fuentes probables de financiamiento resultaría muy riesgosa para un partido cuya credibilidad y honorabilidad tardarán en recuperarse.
6. El partido como integrante de un sistema multipartidista moderado. Dado que el sistema tiende al tripartidismo, el PRI deberá estar abierto a un sistema de alianzas continuas y cambiantes. Se abre la opción de funcionar como centro gravitacional del sistema, pero sin una renovación muy amplia y sin resolver los problemas señalados, esa posibilidad se ve muy limitada. Por lo demás, todavía resultaría más difícil asumir una muy depurada y actualizada posición socialdemócrata para lograr establecerse como centro del sistema.

Al triunfo de la elección presidencial, doce años después, en 2012, ¿cómo califica el PRI en cada uno de estos aspectos establecidos por Francisco Reveles y que el tiempo ha probado como cruciales? Lo cierto es el muy pobre avance en pocos de ellos y el *statu quo* en la gran mayoría. En el periodo transcurrido, lo único que se puede considerar como avance relativo y no consolidado es la configuración de una suerte de coalición o cónclave configurado por los gobernadores de los estados y los líderes camarales, con una participación lateral y casi simbólica de los dirigentes de las grandes organizaciones —de hecho, los de la CNC y la CNOP resultan de acuerdos de esa coalición.

En este marco, aunque la dirigencia del partido tiene un poder propio, sobre todo porque las tres últimas —Roberto Madrazo, Beatriz Paredes y Humberto Moreira— se eligieron mediante comicios internos, ello no basta, porque tales procedimientos resultaron de acuerdos previos en la coalición que, en algún grado, si no determinaron el resultado, sí lo acotaron considerablemente. La dirigencia cuenta, sobre todo, con el reconocimiento del IFE, lo que le da certeza y estabilidad, y con el manejo casi *ad libitum* de los recursos financieros que éste le otorga, es decir, el monopolio de las finanzas internas. Aun así es insuficiente; al final de cuentas los candidatos a gobernadores, sobre todo, deben procurarse sus propios medios para sus campañas, en todos los casos muy costosas.

Si bien el cónclave de gobernadores y dirigentes ha funcionado, no se puede decir que sea un mecanismo estable y suficiente. Su desempeño ha sido variable; no pudo evitar que Roberto Madrazo impusiera su candidatura a la Presidencia de la República, aun cuando dominaba la conciencia de que en ningún caso sería un candidato bien visto por el electorado; su desprestigio y superficialidad como dirigente de antemano lo descalificaban. No obstante, la coalición no logró detenerlo y el partido pagó un muy alto costo en la elección presidencial de 2006. Lo único que tenía en su haber era el buen desempeño en la elección intermedia de 2003 y los triunfos electorales en los estados. Pero ambos resultaban de acuerdos coyunturales con los gobernadores y diversas fuerzas internas y no de un sistema estable de operación; de tal manera que, en ningún caso, anunciaban un tránsito hacia un nuevo sistema. Más bien, lo que se observó fue un incremento del control personal de Madrazo y un grupo dominante en torno a él, lo que estaba más en la línea tradicional de apoderamiento del partido por una oligarquía interna, en torno al propio Madrazo, antes que de un tránsito hacia la democratización.

Tal vez aprendieron la lección, pero hasta ahora no está claro cómo fue posible que el cónclave de gobernadores y dirigentes operara hacia 2012 de manera más armónica y consistente. Lo que hasta ahora se ha percibido con claridad es que la cohesión que mantuvieron se fue generando en torno a la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo pronto, con buenos resultados para el PRI. No obstante, la historia se repite; esta trayectoria no sugiere ningún proceso claro, observable, de generación de mecanismos internos de negociación, promoción de carrera partidaria, competencia interna y elección democrática de dirigentes y candidatos.

Todo lo contrario, indica el retorno al sistema tradicional de subordinación al Presidente de la República.

Guadalupe Pacheco (2010) documentó, precisamente, la operación de los gobernadores durante el último tercio del gobierno de Vicente Fox y la dirigencia de Roberto Madrazo. En su reconstrucción se observa la clara división de los gobernadores en grupos y sólo uno de ellos permanentemente asociado al dirigente Madrazo. No sólo, como se dijo, la elección del candidato interno fue tensa y carente de consenso, sino la derrota electoral —como no podía ser de otra forma— produjo tensiones mayores y hasta crispación.

Lo evidente es que el PRI estaba obligado a reconocer el triunfo de Felipe Calderón, siguiendo la trayectoria abierta en 2000, y, sobre todo, a la luz del ominoso tercer lugar que obtuvieron el partido y, claramente, su candidato Roberto Madrazo. Sin embargo, éste se resistió a reconocer la derrota obvia y a soltar las riendas de la organización. Como muestra Guadalupe Pacheco, la tensión duró semanas y no fue fácil a la coalición de gobernadores conseguir la salida de Madrazo.

De aquí no se sigue que la cúpula de gobernadores constituya un mecanismo estable y duradero de gobierno interno y conducción partidaria. Más bien, está resultando una suerte de recurso para manejar la transición del PRI, de su condición de hegemonía perdida, a la de un organismo apto para competir por la Presidencia de la República. En tales condiciones ha podido, durante este plazo de doce años, seleccionar sus objetivos, jerarquizarlos a partir del principal: poder electoral, reduciendo al máximo los que le someten a una presión mayor —como son los de orden programático, oferta de gran alcance y propuesta efectiva de renovación nacional, y sobre todo, el que más riesgos le significa, una verdadera definición ideológico-política actualizada—, toda vez que pueden someter al partido a rudas controversias internas y a resquebrajamiento en la base electoral que ha venido acumulando mediante la estrategia de juntar votos con el menor desgaste.

Ciertamente, a partir de 2006, la operación desde el Senado de Manlio Fabio Beltrones, el poco peso de Beatriz Paredes como dirigente y el conjunto de intereses que perfilaron a Enrique Peña Nieto fueron generando cohesión y consenso entre los gobernadores, lo que se incrementó en tanto el partido fue ganando gubernaturas a lo largo del sexenio y, más todavía, con el muy buen rendimiento que obtuvo en las elecciones intermedias de 2009, brillantado por los magros resultados del PAN.

Visto lo anterior, todo lo demás sigue prácticamente igual. Ningún sistema nuevo y promisorio de elección de

dirigentes que dé a sus líderes fortaleza, legitimidad y, sobre todo, estatura y eficacia de liderazgo. Hasta ahora la mediocridad en el liderazgo ha sido notoria, cuando no el desprestigio. Beatriz Paredes tuvo un gris desempeño —algo propio de ella, aunque su eficacia para trabajar a los medios le permita reflejar otra imagen—, marcado por la inmovilidad del partido, la colaboración sometida a los gobernadores en las elecciones en los estados y a los líderes del Congreso en otras materias. En lo esencial, cuidó de su imagen y su proyección, descuidando totalmente la del partido, a tal punto que llegó a convertir las reuniones de Consejo Político Nacional en actos casi clandestinos, de agenda preaprobada y desahogo exprés, sólo para cubrir el trámite. Las posiciones que adoptó y las resistencias que buscó exhibir, como es propio del prisma vil, sólo buscaban el fortalecimiento personal, su promoción y las garantías de una próxima posición; un modo de vivir que explica la cadena de puestos que ha tejido y la sobrevivencia camaleónica de sexenio a sexenio. Esa incapacidad política, la pobreza de liderazgo y formación se constataron sobradamente durante la campaña en el D.F. a Jefe de Gobierno. Ni caso tiene, desde luego, ocuparse de la Presidencia de Humberto Moreira. Lo que no puede dejar de observarse es que la llegada de un político de tan precarios merecimientos y tan notorios negativos habla precisamente de la debilidad interna del partido para generar dirigentes de alto calibre y liderazgos de prominente calificación y competitividad.

La penuria ideológica y de cultura política se exhibe en cualquier revisión de las publicaciones del partido. Cabe decir que éstas prácticamente desaparecieron durante la gestión de Roberto Madrazo, lo que exhibe con nitidez su carácter iletrado desde el punto de vista de su formación y su orientación, que se sintetiza en el pragmatismo vil del operador que sólo busca posiciones para él. Beatriz Paredes, aunque comparte el carácter iletrado en formación política de Madrazo, procura disimularlo —y hasta disfrazarlo con el recurso de frases y lugares establecidos de lo políticamente correcto del centro izquierda—, tampoco llevó a cabo ninguna acción relevante.

Así, en lo ideológico, no sólo el páramo, sino la decisión de evadir definición, compromiso, una opción puesta al día, se constata en las revistas del partido. Lo único que muestran es el rezago de cultura política, de debate contemporáneo, que se padece ahí. Las publicaciones resultan evocativas de tiempos anteriores, o desfasadas con respecto al debate contemporáneo, ancladas anacrónicamente en temas que ya han perdido vigencia, al menos como ahí se presentan, evadiendo el compromiso con la actualidad,

cuando no son, simplemente, imitación triste de publicaciones comerciales con opulencia de presentación gráfica y penuria de contenido. Así siguen hasta ahora.

De tal manera que un partido que no revela cambio en sus publicaciones, novedosos recursos ideológicos bien sustentados en la contemporaneidad, difícilmente puede ofrecer una renovación ideológica integral. Lo primero que requiere un partido que busque reformarse es la renovación cultural interna; nada más lejos del PRI. Por el contrario, parece que se busca el territorio seguro de los viejos tiempos y mantener las inercias. Y se vio con claridad, como ocurre desde hace varios sexenios, en el debate político ideológico durante estas campañas: el PRI siempre perdió frente al PAN y el PRD, frente a sus críticos y los analistas en los medios y, al final, frente al público y grupos ciudadanos; con nadie pudo debatir sostenidamente, no pudo mostrar sus razones y menos convencer. Como ya se dijo, el PRI en la campaña presidencial tuvo que resignarse a quedar en la posición en la que lo colocaron sus contendientes, el partido del dinero y los oligarcas, sin definición, ideología ni propuesta convincente.

La diferencia entre Beatriz Paredes y Roberto Madrazo es mínima, apenas de imagen personal y modalidades de manejo del poder concentrado, autoritario, centralizador en el partido; dos caras de la misma moneda. Si Madrazo era ostentoso, realista cínico, rudo, Beatriz trató de ocultar esas mismas características, buscando aparecer negociadora, conciliadora, ajena a polémicas y discusiones. Procuró dar la imagen de cercanía ideológica a los demócratas e izquierdistas, con pésimos resultados. Al concluir su gestión, el partido no era sino lo que había venido siendo desde años atrás: la conjugación de un candidato en ascenso (Enrique Peña Nieto), con estrella —en ese momento luminosa—, y un conjunto, una red de poderes locales, que tenía cada uno como centro de cohesión al gobernador del estado, ahí donde el PRI gobernaba.

La cuota de poder, en este sentido, no era poca (19 gubernaturas), una plataforma envidiable para la elección presidencial; al mismo tiempo, una fuente de tensiones y dispersión de poder para un Presidente de la República priísta en el futuro; y, sobre todo, un mal augurio para la reconfiguración estructural y programática del PRI. Aquí está una de las claves, quizás la principal, de los grandes desafíos que deberá enfrentar el presidente priísta si quiere consolidar la presidencia, como él mismo lo ha propuesto, a la vez que democrática, fuerte y con suficiente centralidad.

La dificultad para lograr este fin estriba en que depende de un problema de conjunto del orden institucional. Si algo

evidentemente está fallando en el régimen político mexicano son las instituciones; si algo piden a gritos los ciudadanos y la realidad de la nación es una reforma institucional. Sí, una verdadera reforma institucional, más allá de la ampulosa y retórica reforma del Estado. El partido que se designa institucional nada ha dicho al respecto, nada ha planteado para sí mismo. La más ruinosa de las instituciones parece que nada tiene que decir.

Fuentes

- Bravo Ahuja, M. (2009a, septiembre-diciembre). “Tendencias electorales: la volatilidad del voto en la contienda federal y en las elecciones estatales del 2009”. *Estudios Políticos*, 9ª época, 18, 53-74.
- Bravo Ahuja, M. (2009b). “Elecciones 2009. Tendencias y perspectivas”. En López Montiel, G.; Mirón Lince, R. M. y Reveles Vázquez, F. (Coords.), *Los estados en el 2009: lucha política y competencia electoral* (pp. 17-55). México: Instituto Electoral del Estado de México/UNAM/AMCEE.
- Elizondo Mayer-Serra, C. y Nacif Hernández, B. (comps.). (2002). *Lecturas sobre el cambio político en México*. México: CIDE-FCE.
- Magaloni Kerpel, B. (2002) “Dominio de partido y dilemas duvergerianos en las elecciones presidenciales de 1994 en México”. En Elizondo Mayer-Serra, C. y Nacif Hernández, B. (Comps.), *Lecturas sobre el cambio político en México* (pp. 229-310). México: CIDE-FCE.
- Mirón Lince, R. M. (2009). “Las elecciones 2009 y los resultados de largo alcance: partidos, electores e instituciones”. En López Montiel, G.; Mirón Lince, R. M. y Reveles Vázquez, F. (coords.), *Los estados en el 2009: lucha política y competencia electoral* (pp. 435-462). México: Instituto Electoral del Estado de México/UNAM/AMCEE.
- Pacheco Méndez, G. (2010, enero-abril). “El PRI ante la crisis electoral de julio de 2006: ¿lealtad institucional, traición o realpolitik?”. *Estudios Políticos*, 9ª época, 19, 59-95.
- Reveles Vázquez, F. (coord.). (2003). *Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación*. México: UNAM/Gernika.
- Rosales Álvarez, S. (2010). *El Partido Revolucionario Institucional: caída y ascenso del partido hegemónico. 2000-2012*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México.
- Villa Aguilera, F. M. (2009). “Electores, partidos e instituciones en el cerco oligárquico”. En López Montiel, G.; Mirón Lince, R. y Reveles Vázquez, F. (coords.), *Los estados en el 2009: lucha política y competencia electoral* (pp. 417-434). México: Instituto Electoral del Estado de México/UNAM/AMCEE.